



TALA ILEGAL / I

Invade bosques y selvas el crimen organizado

● Arrasa zonas forestales ante la debilidad o cobijo de autoridades; terror en comunidades

AMENAZADOS, POBLADORES TIENEN LAS MANOS ATADAS

En alianza, bandas de criminales y autoridades arrasan con bosques y selvas a fuego y sangre

El país cuenta con 138.7 millones de hectáreas madereras, de las cuales, según la Conafor, cada año se deforestan 208 mil. De esa forma se pierde la mitad de la vegetación, la escasez de agua predomina, crece la inseguridad y se asesina a defensores ambientales, como Isidro Baldenegro y Julián Carrillo

EN LA TALA ilegal de bosques y selvas del país la presencia del crimen organizado es creciente y se ha vuelto imparable. Domina ejidos y comunidades forestales, donde arrasa con el arbolado, ante la desazón de los pobladores, muchas veces amenazados. Ejerce control sobre autoridades, que terminan por fingir no ver el problema, y hay casos en que se vuelven cómplices de los talamontes. La madera obtenida de manera irregular termina por venderse a la vista de todos, en los mercados legales y se convierte en muebles y en materiales de construcción.

Los bosques favorecen la recarga de acuíferos, funcionan como "fábricas de agua", son el hábitat de vida silvestre y además capturan carbono, relevante en el contexto de cambio climático. En las zonas donde la tala ha sido intensiva, se ha perdido hasta la mitad de la vegetación, la escasez de agua predomina, ha crecido la inseguridad en las comunidades y defensores de bosques han sido asesinados, como Isidro Baldenegro y Julián Carrillo en Chihuahua, reveló información de corresponsales de *La Jornada*.

En las regiones forestales habitan 12 millones de personas y hay

16 mil 944 ejidos y comunidades. En 20 estados existen 122 zonas críticas por "distintos ilícitos", como tala ilegal, lavado de madera, extracción de troncos sanos, sobreexplotación de recursos forestales, entre otros problemas, indicó la Comisión Nacional Forestal (Conafor).

Entre esas zonas están Huitzilac, Morelos, donde la gente no denuncia por temor; en Ocuilán, estado de México, autoridades municipales se cansaron de pedir apoyo al gobierno estatal; en la Sierra Tarahumara, Chihuahua, es un problema permanente, y en Gue-



rrero la delincuencia se aprovecha de conflictos ejidales para talar. Y entre las especies comercializadas ilegalmente hay desde pino, encino, caoba hasta granadillo, que tiene demanda en el mercado chino.

Hay múltiples métodos para llevar a cabo la tala ilegal y operaciones de "lavado" de madera, entre ellos están la falsificación de permisos y autorizaciones; sobornos para obtener autorizaciones de aprovechamiento forestal; talar volúmenes mayores a los concesionados, y mezclar madera legal e ilegal, durante el proceso de transporte a los aserraderos, indica el reporte *Comercio ilegal de madera y aplicación de la ley para protección de los bosques*, del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria de la Cámara de Diputados.

Esto ocurre ante omisiones de las fiscalías, de autoridades locales y federales, y la limitada presencia de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), que tan sólo dispone de 432 inspectores para la vigilancia de bosques, industrias y tráfico de vida silvestre en el territorio nacional.

Cuando ocurre la tala ilícita se debilita al ecosistema, ya que generalmente se extraen los mejores árboles, "se hacen matarrasas, sin buscar el renuevo. Se llenan los vehículos con los trozos y se deja el área expuesta al sol, a la lluvia, el suelo se lava, se erosiona", lamenta Salvador Anta, del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (Ccmss).

En cambio, "con los programas de manejo de bosques y selvas de ejidos y comunidades se hace un inventario de los árboles y planes de intervención. Se extraen las plantas menos conformadas, las que están chuecas, para dejar que la masa forestal siga creciendo. Hay actividades complementarias que permiten que el bosque se mantenga. Se asegura que haya suficiente renuevo para que el arbolado derribado vuelva a crecer y se trabaja en pequeñas áreas, con asesoría técnica, permisos y supervisión gubernamental", indicó.

Cherán, Michoacán, es un ejemplo a nivel nacional, pues expulsó al crimen organizado y a las autoridades que lo apoyaban en el saqueo de madera. La comunidad recuperó su territorio, los bosques

y la vida silvestre.

En 2021, el consumo nacional de madera en rollo fue de 34.37 millones de metros cúbicos, de las cuales sólo se cubrió con producción nacional un poco más de la cuarta parte, 9.3 millones, y se importaron 28.9 millones de metros cúbicos. El país dispone de 138.7 millones de hectáreas forestales, de las cuales, según la Conafor, 208 mil al año en promedio son deforestadas y la tala ilícita contribuye a este problema.

Causas de la tala clandestina

Entre los factores que explican la tala ilícita está la debilidad institucional que se presenta desde hace 15 años. La aplicación de la ley es muy limitada, no hay personal ni estrategias claras de cómo enfrentar el problema, "al no existir acciones institucionales para frenarlo, el problema sigue, se incrementa y se tiene la presencia del crimen organizado", sostiene en entrevista Salvador Anta, del Ccmss.

El personal de la Profepa está concentrado en las principales ciudades, no en el territorio donde debería estar, lo que hace poco eficiente y efectiva la vigilancia. Se carece de información precisa de la gravedad del problema, sólo hay estimaciones, "se habla de que hay una producción de madera ilegal, equivalente a la autorizada anualmente".

Otro factor que provoca esta ilegalidad es que "hay muchos pequeños productores o gente que vive en los bosques, con pequeñas superficies, y se enfrentan a un esquema

legal que no ayuda para buscar los permisos. Lo que tendría que existir son esquemas más flexibles para que la gente con predios forestales los aproveche y aseguren su existencia. Un esquema sería promover la asociación de pequeños productores".

También tiene que ver que ante la falta de acciones y de atención institucional esa laguna es aprovechada por el crimen organizado en varios lugares, "crece, se amplía y se apodera de territorios donde la gobernanza o las capacidades comunitarias son débiles".

Además hay confusión en el gobierno entre deforestación y tala ilegal. "La primera tiene que ver, sobre todo, con el cambio de uso de suelo por la presión de cultivos

agrocomerciales: soya, caña, ganadería". Y en la tala el objetivo es la extracción de la madera.

El destino de la madera ilegal

La tala clandestina crea un sistema de competencia en condiciones favorables para los ilegales y adversas para los que explotan legalmente los recursos forestales, es así que la madera ilegal se encuentra en los mercados a precios más bajos y su consumo es mayor, lo cual impacta en las ventas del producto lícito, menciona Salvador Anta.

La madera obtenida ilegalmente se comercializa por varias vías. Hay muchos mercados locales. "En Oaxaca está la central de abastos, donde se sabe que hay producto ilegal y se vende de manera pública. Algunas empresas la adquieren y posteriormente esa madera se vende en muebles que están en las esquinas de las calles en las ciudades, en mercados".

Para comercializar esa madera se da "lavado", es decir, se usa documentación expedida por Semarnat para movilizar madera ilegal que viene de predios sin manejo forestal o de sitios autorizados donde se saca más de la autorizada.

También ocurre que en los sitios donde se dieron permisos de extracción de madera para dar saneamiento al bosque, se corta la que no tiene afectación de plagas o enfermedades y al no haber vigilancia, sobre todo cuando son rentistas y ofrecen a un industrial la posibilidad de entrar a trabajar a los bosques con permisos, extraen madera sana y la hacen pasar como si estuviera plagada, explica.

Ante este panorama, "hay que enfrentar el crimen organizado, acotarlo, buscar que participen las fuerzas del orden público, cuando las cosas son extremadamente graves. Pero lo más importante, en que se debería trabajar mucho, es en fortalecer a los propietarios de ejidos y comunidades, para que sean los principales guardianes y quienes se encarguen de mantener el recurso, ya que de ellos viven", apunta.

De los corresponsales
y Angélica Enciso L.



“

*Se carece de datos
precisos de la
gravedad del
problema, sólo
hay estimaciones*



◀ La tala y las operaciones de “lavado” de madera se ejecutan con permisos y autorizaciones falsos. Foto La Jornada



Huitzilac, paraíso de talamontes y de huachicoleros de agua

Caravanas de hasta 50 camionetas transportan a diario y a plena luz del día la madera obtenida ilegalmente; no es raro que la Guardia Nacional circule junto a ellos

POR CORRUPCIÓN U omisión, el municipio de Huitzilac “está controlado por talamontes”, quienes han devastado más de 10 mil hectáreas de bosque de pino-encino en los pasados 15 años, denunciaron defensores del medio ambiente en Morelos.

Diariamente, el crimen organizado corta entre 100 y 150 árboles gruesos o delgados, y a partir de las 19 horas acarrea la madera en 30 o 50 camionetas que cargan tres toneladas y media de peso cada una, a las cuales se les ve circular sin problema por la carretera federal México-Cuernavaca.

Huitzilac, localizado a 14 kilómetros de Cuernavaca y a 58 de la Ciudad de México, se ubica en el corredor biológico Chichinautzin, Lagunas de Zempoala y El Tepozteco, perteneciente a las Áreas Naturales Protegidas (ANP).

Los denunciantes, quienes han recibido amenazas de los criminales, acusaron que de seis años para acá “aumentó de manera alarmante” la tala ilegal e incluso “desvergonzada”, porque realizan sus actividades ilícitas “a plena luz del día”.

La situación más difícil de afrontar, expusieron, “es la impunidad con la que actúan”. Porque es un problema que “ni ocupa ni le preocupa a las autoridades de los tres niveles de gobierno”.

Ni al alcalde priísta de Huitzilac, Rafael Muñoz Vargas, ni al gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, ni al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador hacen algo, señalaron.

Lo anterior pese a que las ANP que alberga Huitzilac colindan con la capital del país y con el estado de México, y son una importante zona

de recarga de los mantos acuíferos del centro de la República, región que actualmente enfrenta sequía y escasez de agua, por ejemplo, la ciudad de Cuernavaca, la cual según especialistas se debe a falta de lluvias y recarga de los pozos.

La operación de los talamontes

En este municipio, con unos 24 mil 515 habitantes, todos saben quiénes se dedican al corte de árboles y su venta ilegal; pero no los denuncian porque “les puede costar la vida”.

De los 2 mil 200 comuneros, unos 200 están a la cabeza de la tala clandestina, y otras 100 personas “contratan”, en su mayoría, a menores de edad; “los usan como carne de cañón”, denunciaron.

En el negocio de la tala “hay familias enteras, incluso por generaciones han heredado la actividad. Lo más graves, expresaron los defensores, “es que han traído a grupos de delincuentes de otros estados”.

Con los años han sofisticado su nivel de *cooptación* de corporaciones policíacas. Ahora se puede ver incluso cómo elementos de la Guardia Nacional escoltan a los camiones, conocidos como “las troceras”, en las cuales transportan la madera hacia los 20 aserraderos encubiertos de Huitzilac.

La gente mala, apoyada por familias de comuneros –que son los menos– llegaron a vivir aquí, invadieron casas y terrenos, y aumentaron su control mediante un brazo armado que opera de manera impune”, afirmaron.

Con las ganancias de la tala ilegal y las de sus otras actividades criminales, aseguraron las fuentes, los talamontes adquirieron armas y tecnología para estar mejor comu-

nicados, y pueden hasta pagar “una red de *halcones*, todos menores de edad, que vigilan el pueblo y las zonas boscosas”.

“¡Está bien cabrón!, pero lo que más nos extraña y enoja es que nadie ve ni nadie dice nada por el paso de las caravanas de 30 o 50 unidades cargadas de madera”, indicó un ambientalista.

Además, si raramente las autoridades decomisan un cargamento, enseguida llega una muchedumbre de hombres, mujeres y niños, “como avispas”, para detener la incautación. “Hemos visto cómo han desarmado a elementos del Ejército.

Sin agua

En las reuniones vecinales, narraron pobladores, la principal queja es que “no tienen agua” y “cada vez hace más calor”; pero nadie, de manera abierta, se atreve a decir que “la tala de árboles está provocando la escasez porque los delincuentes tienen orejas en todas partes”.

Ante ello, exigieron al presidente López Obrador, y a la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, que actúen de manera urgente, porque la tala indiscriminada aceleró, en años recientes, los bajos niveles de captación de agua en los pozos.

Huitzilac se encuentra en la parte alta de Morelos y la sequía es más patente porque ningún pozo tiene agua y se ven obligados a pedir líquido al poblado de San Juan Atzingo, municipio de Ocuilán, estado de México. “Estamos en la parte norte de Morelos, desde Huitzilac, Tepoztlán hasta Tetela del Volcán, somos la recarga natural de los mantos acuíferos que dan vida al todo Morelos. Y no tenemos agua. No hay agua”, recaló una vecina.



A pesar de que habitan en los "bosques de agua", no se les permite abrir pozos, aquí el agua está muy profunda. Y en el mejor de los casos, el ayuntamiento les abastece del líquido una vez por semana. Hay zonas más altas como el poblado de Tres Marias, al que le suministran líquido cada cuatro meses.

El nuevo negocio de los talamontes

Por la escasez de agua, las bandas de talamontes diversificaron su

negocio: el "huachicoleo de agua". Antes robaban hidrocarburos de los ductos de Petróleos Mexicanos. Tras su cierre, ahora "ordeñan" la tubería de agua potable y venden entre mil 500 y 2 mil pesos el tanque cisterna.

Los pobladores la compran por necesidad y no denuncian a los criminales porque ellos saben dónde viven. "Aquí los malandros dicen: 'podemos hacer lo que queramos, tenemos armas y dinero y nadie nos

detiene'. Eso se explica por la versión de que apoyaron la campaña del edil Vargas Muñoz.

De la Redacción



▲ En vehículos llamados *troceras* se transporta la madera hacia los 20 aserraderos encubiertos de Huitzilac. Foto *La Jornada*



Inundaciones y sequías, otras de las graves consecuencias

LOS TALAMONTES DEL municipio de Huitzilac "son personas muy peligrosas", consideró el encargado de despacho de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), en Morelos, Juan Ramón Acosta, de quienes dijo, forman parte del "crimen organizado."

Recordó que en marzo anterior, una camioneta cargada con madera del bosque se dirigía a los aserraderos clandestinos de esa demarcación; pero se descompuso en la carretera Lagunas de Zempoala y la inmovilizó la Guardia Nacional.

Sin embargo, tuvieron que ceder porque "muchos habitantes llegaron y se llevaron la unidad". Los uniformados evitaron un enfrentamiento pues entre la multitud había mujeres y niños, indicó.

El funcionario reconoció que en Huitzilac se tala de manera ilegal

en las áreas naturales protegidas de Lagunas de Zempoala, el corredor Biológico Chichinautzin y en El Tepozteco, con afectaciones a la flora y fauna, como el conejo de la montaña y el gorrión serrano.

Además, ha bajado la captación de agua en los pozos que surten del líquido, por ejemplo, a Cuernavaca, aceptó Juan Ramón Acosta.

Respecto a si conocía cuántas hectáreas han afectado de esas zonas protegidas, aseguró que no hay "datos precisos"; pero afirmó que el daño es "significativo", pues esta zona es de recarga de agua.

Refirió que la tala clandestina daña la biodiversidad; no obstante, no dio a conocer si había algún operativo oficial que impida dicha afectación.

Destacó también que el negocio ilícito ya provocó disminución en los mantos freáticos, los cuales antes

generaban más de mil 900 milímetros de agua anualmente; pero con la tala este proceso "tiende a disminuir por la deforestación".

La escasez de agua en Cuernavaca no es un problema que tiene que ver con la luz (el ayuntamiento acusa a la Comisión Federal de Electricidad de cortar el suministro en los pozos que abastecen al municipio capitalino; la empresa estatal, responde que la alcaldía tiene una deuda histórica); sin embargo, añade el funcionario federal, el problema va más allá.

La falta de agua, "precisamente, se debe a que las lluvias deberían filtrarse a partir de la presente vegetación; pero ésta corre libre porque ya no encuentra ningún obstáculo", de ahí que también se observan más catástrofes naturales e inundaciones, concluyó.

De la Redacción



▲ En Huitzilac, a pleno día, se puede observar a camiones cargados con madera y detrás de ellos varios vehículos de la Guardia Nacional. Foto *La Jornada*



En Ocuilan exterminan por igual bosques que a defensores ambientales

Félix Alberto Linares fue alcalde; denunció los ilícitos hasta su muerte en 2021 en su accidente aéreo

LA ZONA LIMÍTROFE entre los estados de México y Morelos ha sido especialmente afectada por la tala clandestina, actividad que prevalece en la región desde hace más de 25 años. Pobladores del municipio mexiquense de Ocuilan aseguran que en el pasado cuarto de siglo han sido devastadas más de 5 mil de las 12 mil hectáreas de bosques que había en ese territorio, donde se ubican las lagunas de Zempoala.

A pesar de las reiteradas protestas de pobladores, las autoridades no han querido o no han podido impedir la operación de criminales dedicados al saqueo de madera en los bosques del área donde colindan las entidades mexiquense y de Morelos, una de las franjas de mayor recarga de agua en el centro del país.

Félix Alberto Linares, alcalde de Ocuilan en tres ocasiones —de 2006 a 2009, de 2016 a 2018 y relecto hasta 2021, aunque murió el 4 de enero de 2020 en un accidente aéreo—, se cansó de pedir apoyo a los gobiernos federal y estatal, para que enviaran a la zona personal militar y policías estatales para combatir la tala ilegal, pero nunca obtuvo respuesta.

Linares sufrió un atentado en mayo de 2016 en la carretera Santa Martha-Cuernavaca, cuando sujetos no identificados dispararon desde un sector boscoso en más de seis ocasiones contra la camioneta en la cual viajaba. El perredista salió ileso y de inmediato fue a Toluca a pedir apoyo de seguridad a autoridades mexiquenses; un día después pidió protección a la

administración que encabezaba el presidente Enrique Peña Nieto.

El ex edil consideró en aquella ocasión que el ataque pudo ser resultado de sus constantes denuncias sobre la operación de agrupaciones dedicadas a la tala prohibida en la región que Ocuilan comparte con Morelos.

Días antes de la agresión, filmó un video de casi 10 minutos que mostraba cómo, en total impunidad, camionetas y camiones sacaban madera de la floresta, y se escuchaban en la filmación motores de sierras eléctricas con las que se cortaban árboles con más de 40 metros de altura.

Aseguró que los 30 elementos de la policía municipal de Ocuilan, 15 por turno, no podían enfrentar a taladores furtivos que no sólo los superaban en número, sino en armamento.

Días después del ataque, el gobierno federal instaló una base de operaciones mixtas del Ejército Mexicano en Ocuilan, pero sólo duró unas semanas; después, los efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional se fueron.

Linares falleció en Tequesquitengo, Morelos, cuando la avioneta bimotor en la que viajaba falló y se desplomó. Pero Alberto Linares no era el único que había denunciado la operación de taladores clandestinos en su región.

A finales de la década de 1990, pobladores de San Juan Atzingo comenzaron a denunciar la presencia de saqueadores de madera provenientes de Huitzilac, Morelos, a los que delincuentes pagaban para cortar árboles.

Idelfonso Zamora, comunero de San Juan Atzingo, cobró notoriedad por sus reclamos contra la tala clandestina, y recibió amenazas de muerte. Un día se le advirtió que sería golpeado donde más le dolería.

En mayo de 2007 Aldo y Misael, hijos de Idelfonso Zamora, fueron emboscados; el primero murió y el segundo sufrió heridas graves, pero se recuperó. Este atentado cimbró no sólo a la familia Zamora, sino a los habitantes de San Juan Atzingo y Santa Martha, que dejaron de protestar durante varios meses.

Las quejas de la gente de Ocuilan prácticamente cesaron tras la muerte de Félix Alberto Linares. En 2022 sólo hubo una movilización, cuando pobladores de Santa Martha y San Juan Atzingo cerraron la carretera que va al Santuario de Chalma, para exigir a autoridades apoyo contra la tala ilegítima.

“Están exterminando los bosques y las autoridades no hacen nada. Por más denuncias que se hacen, nadie mueve un dedo. Se les han dado incluso coordenadas de dónde está ocurriendo el saqueo, y nada. Hay una total negligencia y no quieren atender este problema”, aseguró un participante en esa manifestación.

“Siempre nos mandan un par de camionetas de la Guardia Nacional o del Ejército a la zona para patrullar, pero lo hacen dos o tres días y se van. Así el problema no se va a resolver”, indicó otra manifestante.

De la Redacción



▼ Pobladores de Ocuilan aseguran que en 25 años han sido devastadas más de 5 mil de las 12 mil hectáreas de bosques que había en ese territorio, donde se ubican las lagunas de Zempoala. Foto *La Jornada*